



El abogado que era más socio que defensor

Descripción

El 11 de enero de 2016, Albino Ferreras Garza sufrió el que acaso fue el peor revés de su dilatada carrera. Ese día, el Tribunal Constitucional de Andorra desestimó el recurso de amparo que el abogado venezolano había presentado poco antes, solicitando se suspendieran las comisiones rogatorias enviadas por ese país a Estados Unidos, España y Venezuela, en busca de información sobre 30 ciudadanos venezolanos, entre ellos, él mismo.

Según los cargos judiciales, Ferreras era sospechoso de participar en una trama de lavado de dinero cuyos montos superaron los 2.000 millones de euros. El esquema, que usó como caja de caudales uno de los mayores bancos del principado pirenaico, la Banca Privada de Andorra (BPA), fue denunciado en primer lugar por las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y a la larga dio al traste con el propio banco, con su sucursal en España, el Banco Madrid, y con la reputación de Andorra como un confiable paraíso fiscal, impenetrable al escrutinio de intrusos.

La denuncia de Washington detectó tramas corruptas con clientes rusos, chinos y venezolanos. Esta última terminó por ser la causa 2015-23 i 25-RE de la justicia andorrana, ante la cual Ferreras interpuso su recurso, que terminó pareciéndose más a una confesión que a un descargo. Los alegatos del jurista dejaron en claro el rol que venía desempeñando en la red que se tejió en torno a la petrolera estatal Pdvsa, por la que funcionarios y familiares del entonces presidente de la empresa, Rafael Ramírez Carreño, cobraban millonarias comisiones ilegales a empresas, disfrazadas de “asesorías”, para otorgar contratos con el Gobierno venezolano. Las comisiones se pagaban a empresas en Panamá constituidas para tal fin, que luego giraban a la BPA.

Con “vigor”, según refiere el dictamen, Ferreras Garza argumentó ante el juzgado que no era funcionario público ni director de una subsidiaria de Pdvsa, como se señalaba en la rogatoria, sino tan solo “asesor jurídico de los Sres. Diego Salazar y Luis Mariano Rodríguez”, revelando así el servicio que viene prestando dentro de las altas esferas del chavismo: el de un *coach* de soluciones jurídicas para redes financieras que permitan mover los dineros habidos de mala manera.

Lo que Ferreras no pudo negar ante esta corte fue que recibió dos pagos en una cuenta a su nombre en el principado de Andorra y que estas transferencias, cuyos montos el Ministerio Fiscal de ese país

calificó de “ingentes”, fueron hechas por Diego Salazar y Javier Alvarado, dos de los principales protagonistas del esquema irregular investigado por las autoridades del país de los Pirineos.

“El hecho esencial que justifica la indagación es la recepción no discutida por su parte de unas cantidades de dinero que no son insignificantes procedentes de ciertas personas, indiciariamente o hipotéticamente involucradas en hechos graves de blanqueo de sumas muy elevadas de dinero”, sentenció el juzgado para desestimar los alegatos del jurista sobre la violación al debido proceso y el derecho a la intimidad.



[Ferreras indicó al Tribunal Constitucional de Andorra que es el “asesor jurídico” de Diego Salazar y Luis Mariano Rodríguez Cabello. Foto: Runrunes.es](#)



[Ferrerias indicó al Tribunal Constitucional de Andorra que es el “asesor jurídico” de Diego Salazar y Luis Mariano Rodríguez Cabello. Foto: Pavani/ AFP](#)

Los depositantes de Ferreras Garza estaban entre los actores principales de la trama de la BPA. Diego Salazar, por ejemplo, al que Ferreras admitió asesorar, es primo de Rafael Ramírez y es señalado por las investigaciones como el cabecilla de esta red de pago de sobornos entre los años 2007 y 2012. Apodado [El señor de los relojes](#), se hizo famoso por gestos de ostentación saudi, como el reparto de relojes Rolex entre los invitados a una de sus fiestas o una propina de decenas de miles de euros que dejó en un hotel de París y que, para su desgracia, llamó la atención de las autoridades antiblanqueo de Francia. Tras perder el favor del gobierno de Maduro al mismo tiempo que Ramírez, fue detenido y permanece recluido en el Helicoide, una de las sedes en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política).

Javier Alvarado, por su parte, fue viceministro de Desarrollo Energético y está bajo investigación en España por la presunción de que cobraba comisiones a empresas de ese país para obtener contratos en el sector eléctrico venezolano. De acuerdo con la investigación de Andorra, manejó cinco depósitos y cuatro sociedades que percibieron 46,5 millones de euros. Fue detenido en Madrid el 9 de mayo de 2019. Estados Unidos pidió su extradición por acusaciones de lavado de dinero, pero el país ibérico negó la solicitud argumentando que ya era investigado por ese delito en su territorio y que el exfuncionario posee la nacionalidad española. Fue puesto en libertad condicional en septiembre de 2019 luego de pagar 90.000 euros de fianza.

[Rodríguez Cabello](#), el otro asesorado por el letrado, famoso por aparecer en una grabación ofreciendo un soborno al gerente de la BPA, Pablo Laplana, para que se detuvieran las pesquisas, es considerado el principal operador de Salazar ante esa entidad bancaria y se entregó a las autoridades españolas en 2018. Su nombre también está asociado a la génesis de las investigaciones andorranas, pues era representante de Highland Assets Corp, una de las principales receptoras de las comisiones pagadas por empresas chinas y desde cuya cuenta bancaria fue hecha una transferencia a un empleado de un hotel en París por 99.980 euros —un monto mayor a la fianza pagada por Alvarado—, registrada como “propina por servicios prestados” y atribuida a Salazar, lo que activó las alarmas de la Agencia Contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de la República Francesa (Tracfin).

Así quedó documentado un mapa apenas incipiente de las relaciones peligrosas de este multifacético abogado, cuyos vínculos con la élite del chavismo se encuentran asentados no solo en la jurisprudencia andorrana, sino también en los registros mercantiles de Panamá y Estados Unidos y que, además, cuenta con experiencia en la junta directiva de empresas venezolanas vinculadas con distintos despachos ministeriales, especialmente en el sector petroquímico.

Cliente satisfecho reincide

Ferreras Garza tiene 59 años de edad, nació en Madrid y se graduó en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas en 1985. Apenas un año después fue socio fundador del bufete Ferreras, Escala, Vega & Asociados, que en el año 2000 pasó a llamarse Mata Borjas, Priwin & Ferreras y que, con otro cambio de socios y la llegada del abogado Carlos Luis Bello Anselmi en 2013, redujo su nombre a Ferreras & Bello, denominación que mantiene hasta hoy. El escritorio está enfocado “en la atención de corporaciones y de las personas detrás de las corporaciones”, de acuerdo con la publicidad de su página web.

Si bien se sabe que es abogado de profesión, en el mismo sitio web se muestra un currículum que concede a Ferreras una versatilidad inesperada. El resumen indica que se ha desempeñado como director de empresas en sectores tan disímiles como consumo masivo, publicidad, medios de comunicación, industria textil y petroquímica. “También participa en consejos consultivos de empresas en el área de salud, corretaje de seguros y construcción”, añade el website.

En cuanto a que participa en todo tipo de empresas, son múltiples los indicios de que no miente. Por medio de una enmienda al registro ante la División de Corporaciones de Florida, por ejemplo, su nombre quedó incorporado al directorio de Sai Advisors Inc. desde el 8 de septiembre de 2009. El otro director registrado es Rafael Alfredo Sarría Díaz, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro el 18 de mayo de 2018, junto con Diosdado Cabello Rondón, y la esposa y hermano de este, Marleny Josefina Contreras Hernández y José David Cabello Rondón, respectivamente.

De acuerdo con la nota oficial emitida por el Tesoro en esa ocasión, Sarría es el testaferro de Cabello, el poderoso primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y ha “lavado dinero para funcionarios venezolanos a través de la compra de bienes raíces desde 2010”. Añade el texto que Sarría y Cabello “tuvieron asociaciones y empresas en Panamá” y que en 2016 estuvo involucrado en el tráfico de drogas “en nombre de Cabello”. Entre los entes sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) figuraban la propia Sai Advisors

Inc, y otras dos compañías en las que Sarría vuelve a aparecer en compañía de Albino Ferreras Garza como director: Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp.

Ferreras se mantendrá en los registros anuales de estas tres compañías hasta 2016, el mismo año en el que el Tribunal Constitucional de Andorra negó sus recursos de amparo para que detuviera las investigaciones en su contra.

Pero la salida del abogado de las empresas de Sarría no debe interpretarse como un acto de contrición. Ferreras Garza volvió a trabajar con sus antiguos clientes de Andorra, cuyas tramas de corrupción ya habían sido señaladas por las autoridades de ese país, y que luego serían detalladas a través de distintas filtraciones en la prensa internacional.

Un caso fue el de Javier Alvarado Ochoa, quien el 9 de junio de 2017 fue nombrado como presidente de Kikapues Investments Corp, una sociedad de Panamá. El 11 de julio de ese año, una asamblea de accionistas otorga un poder de representación a Albino Ferreras Garza, Carlos Luis Bello Anselmi y Eduardo Trujillo Ariza, todos pertenecientes al bufete.

El documento, que está en el registro mercantil de Panamá, es bastante específico en el objetivo de la representación al indicar que los apoderados están autorizados “para gestionar, en nombre y representación de la sociedad KIKAPUES INVESTMENTS CORP. ante la entidad bancaria denominada BANCA PRIVADA D´Andorra (PANAMÁ) S.A. Y la sociedad panameña denominada BPA VALORES, S.A.”.

El 27 de julio de 2017, apenas 16 días después, Adelais Overseas S.A., otra sociedad registrada en Panamá, dio un poder de representación similar a los mismos tres abogados. El presidente de esta sociedad es Fidel Darío Ramírez Carreño, hermano del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez.

El hecho de que los nombres de estos dos clientes aparecen en la lista de 28 investigados por la trama de Andorra permite presumir -acertadamente- que sus contratos con el bufete fueron similares. pero la realidad fue un paso más allá: los documentos eran prácticamente idénticos, a tal punto que en el poder de una empresa se coló por error el nombre de la otra. Esto provocó que los abogados tuvieran que hacer un nuevo registro en el que se ve tachado el nombre de Kikapues y sobrepuesto el de Adelais Overseas SA.

Armando.info se comunicó con el abogado Eduardo Trujillo Ariza, quien, junto con Ferreras Garza y Bello Anselmi, fue nombrado apoderado de Adelais Overseas en 2017. Trujillo, quien actualmente es el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), expresó que, aunque formaba parte del bufete, no era el abogado encargado de esta sociedad. “Entiendo que esa compañía tenía una cuenta bancaria en Panamá y se otorgó un poder para gestionar, desde el escritorio, algo relacionado con la cuenta bancaria”.

Sobre la especificidad del poder, que señala que los tres abogados estaban facultados para actuar directamente ante la ya desprestigiada Banca Privada de Andorra (BPA), señaló que no podía dar precisiones. También dijo desconocer la actividad a la que se dedicaba la sociedad. “Me imagino que, como muchas sociedades mercantiles, tienen algún portafolio de inversión o alguna cuenta bancaria y esa es su finalidad; proteger algún activo en particular”.

Dijo no tener conocimiento sobre si esta sociedad estuvo implicada en las investigaciones de Andorra

y al consultarle sobre si Ferreras Garza fue el que ejerció la representación establecida en los documentos señaló: “Sí, posiblemente sea, pero no te sabría decir ahora”.

Tras el hallazgo de que Trujillo Ariza también figuraba como apoderado de Kikapues Investments Corp., la compañía de Javier Alvarado, **Armando.info** intentó comunicarse de nuevo con él para conocer su participación en este caso, pero no volvió a responder ni a las llamadas ni al cuestionario enviado por vía telefónica.

Fraternidad petrolera

La fecha en que se fundó Adelais Overseas S.A., marzo de 2012, la sociedad del gastroenterólogo Fidel Ramírez, coincide con la fecha en que Rafael Ramírez nombró a su hermano como director general de los Servicios de Salud y Asistencia de Pdvsa. La designación, sumada a su parentesco con el zar del petróleo, acercó a Fidel Ramírez a la red dirigida por Diego Salazar, su primo, una estructura que, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, tuvo su apogeo entre octubre de 2011 y noviembre de 2012, cuando al denominado *Grupo Salazar* se le vincula al blanqueo de más de 1.300 millones de euros.



El mismo año en el que Fidel Ramírez (al centro) fundó su sociedad panameña fue nombrado, por su hermano Rafael Ramírez, como director de los Servicios de Salud de

Pdvsa

El hermano del expresidente de Pdvsa también apareció en otro esquema de lavado de dinero por el que fueron sentenciados Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, dueños de Miami Equipment & Export, el 15 de noviembre de 2017, por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La Fiscalía de ese distrito logró probar que la compañía de los acusados recibió más de 100 millones de dólares del Consorcio KCT, una contratista habitual del gobierno de Maduro, y que luego estos recursos, disfrazados bajo la figura de “asesorías”, fueron enviados a cuentas bancarias en el extranjero de funcionarios y allegados al chavismo, entre ellos Fidel Darío Ramírez Carreño.

Estos pagos fueron realizados entre enero de 2010 y junio de 2016 cuando Adelais Overseas ya se encontraba activa. Fidel Ramírez tenía, al menos, dos sociedades más en Panamá: R.C. Inversiones 2021, S.A. y Representaciones F.D.E., S.A., también activas durante este lapso.

El [gastroenterólogo](#) también es recordado por haber servido de vocero en una rueda de prensa de médicos tratantes del entonces presidente Hugo Chávez, en octubre de 2011, en la que desmintió las aseveraciones del doctor Salvador Navarrete, quien había señalado en una entrevista a un medio mexicano que el primer mandatario padecía de un tumor maligno y que tenía una expectativa de “hasta dos años de vida”. Aunque las predicciones de Navarrete se verían comprobadas en los hechos, debió marchar al exilio.

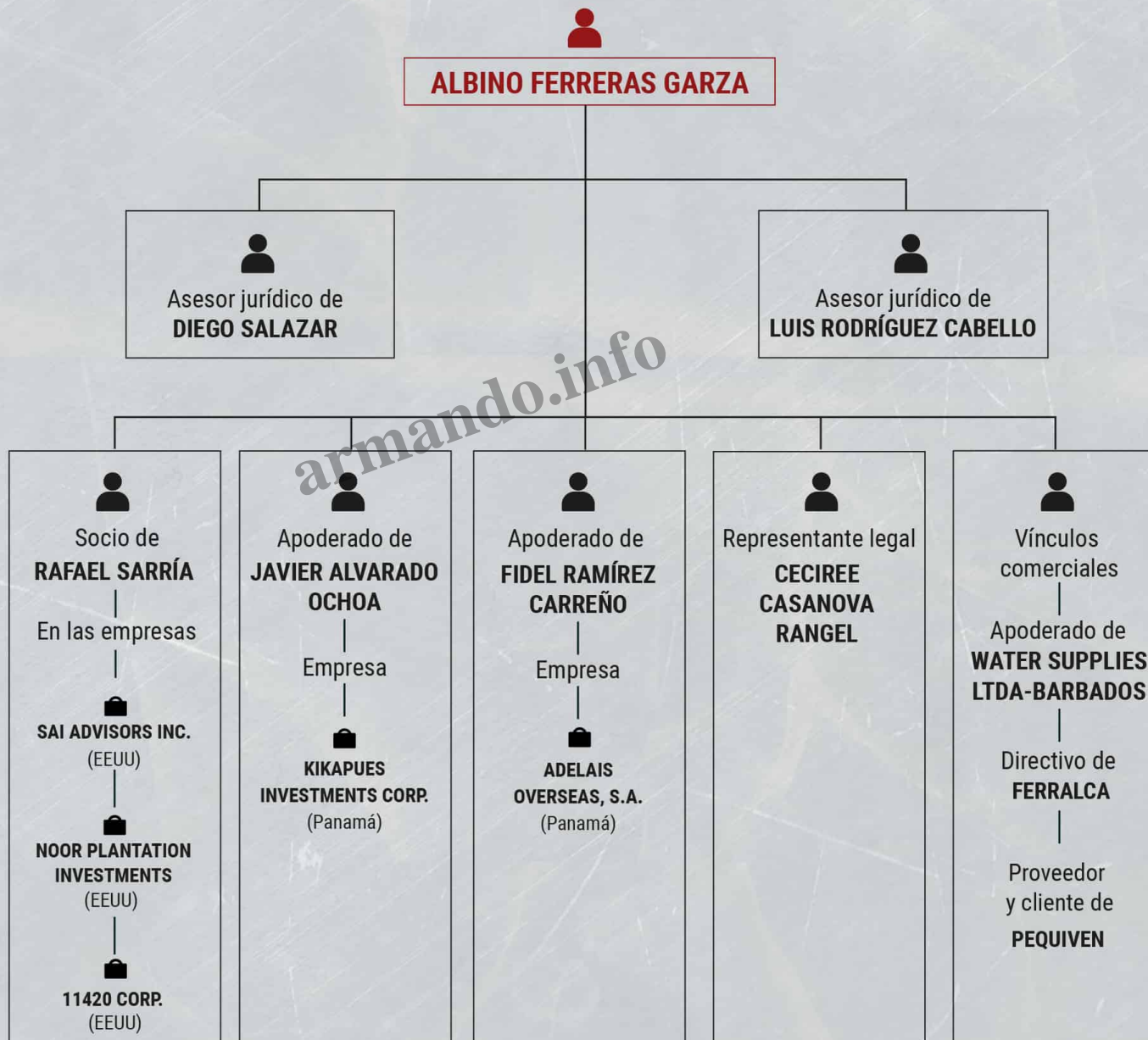
Un boletín semanal de la Unidad de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que forma parte de la [filtración](#) procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, con sede en Washington DC) y a la que **Armando.info** tuvo acceso, reseñaba que el Ocean Bank de Florida emitió un SAR (reporte de actividad sospechosa) sobre los movimientos de las cuentas bancarias de Fidel Ramírez, de Daniel Edilio Ramírez Carreño –contador, otro hermano de Rafael Ramírez- y de la esposa de este último, Valeria Marina Leone Sarro. De acuerdo con el *Kleptocracy Weekly* de FinCEN, en su edición del 23 al 29 de diciembre de 2016, entre enero y diciembre de ese año por las cuentas de los tres ciudadanos venezolanos habían circulado algo más de 1,3 millones de dólares, como producto de 28 transferencias y un cheque conformado. Como por entonces se conocía del escándalo en Andorra, esos saldos llamaron la atención de los supervisores bancarios en Estados Unidos.

El exviceministro Javier Alvarado también se valió de su telaraña de empresas en Panamá para mover los recursos provenientes de sus supuestas “asesorías”. Un [reportaje](#) del diario *El País* de Madrid en enero pasado reveló un pago de 1,5 millones de dólares a la panameña Codfish Investments SA en noviembre de 2014, a través de su empresa Treviso International Foundation fundada en 2012, el mismo año de inscripción de Kikapues Investments Corp., la sociedad representada por Ferreras & Bello.

En agosto de 2014, traspasó ocho millones de euros de la BPA a una cuenta a su nombre en el Millenium Bank de Suiza y en marzo de 2015 pagó seis millones de dólares a una Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav) en Luxemburgo, un instrumento de inversión colectiva que suelen usar quienes poseen grandes fortunas para pagar menos impuestos.

Las conexiones peligrosas del abogado

Socio, asesor jurídico, apoderado o representante legal; el abogado Albino Ferreras Garza es capaz de asumir diversos roles, en distintas jurisdicciones, para asistir a los jefes del chavismo acusados de lavado de dinero.



Fuente: Registros mercantiles de EEUU y Panamá. Tribunal Constitucional de Andorra. Investigación propia.

La oferta de servicios del bufete a los involucrados en la trama de Andorra también llegó a Ceciree Carolina Casanova Rangel, la pareja sentimental de Alvarado. Según pudo conocer **Armando.info**, Ferreras Garza también ha sido representante legal de la ingeniero. Casanova Rangel fue gerente funcional de Recursos Humanos de la Electricidad de Caracas y es acusada por la fiscalía anticorrupción de España de recibir 800.000 euros, que se sospechan provenientes de Pdvsa, a través de una sociedad llamada Cocuiza, en la que ella tenía el cargo de administradora. Aparte de ser una de las personas investigadas por las autoridades andorranas, actualmente aparece como presidenta de, por lo menos, cuatro sociedades en Panamá que permanecen vigentes: Barranca Este 21 Inc., Bimar Worldwide Inc., Las Cañas 39 Inc. y La Calle de Atrás, S.A.

Estos nombres tan notorios en la prensa internacional no son los únicos allegados al chavismo que acudieron a las oficinas de estos tres abogados. Ferreras, Bello Anselmi y Trujillo Ariza también aparecen como representantes legales del Diario El Universal C.A. en una sentencia del 13 de agosto de 2018, cuando el centenario diario estándar ya había sido comprado por Epalisticia Private Equity, una desconocida empresa española. En el momento de la adquisición se habló de que Rafael Sarría, calificado por las autoridades estadounidenses como testaferro de Diosdado Cabello y antiguo cliente de Ferreras, estaba detrás de la compra del periódico. Los nuevos dueños designaron como director del diario al ingeniero Jesús Abreu Anselmi, quien cambió la línea editorial del histórico medio de comunicación para hacerla complaciente al chavismo, lo que provocó renuncias y despidos masivos de periodistas y columnistas.

Además de esto, Ferreras Garza aparece entre los directores de Ferralca, una empresa que tiene más de 50 años operando en la localidad de Morón, en el estado Carabobo, ubicada en la región centro-norte de Venezuela, que alberga al complejo petroquímico más grande del país, sede de la estatal Petroquímica de Venezuela (mejor conocida como Pequiven).

A Ferralca se le identifica en la rogatoria de las autoridades de Andorra como subsidiaria de Pdvsa. Aunque en rigor no lo es, sus conexiones con la petrolera estatal y, en general, con el Estado, son evidentes: sus materias primas las obtiene de corporaciones oficiales. Compra ácido sulfúrico a Pequiven, ente adscrito al Ministerio del Petróleo, e hidrato de aluminio a la también estatal Bauxilum, para la elaboración de sulfuro de aluminio, un componente que se usa para el tratamiento del agua, que luego vende a todas las empresas hidrológicas públicas del país. Un negocio cuyo ciclo requiere de buenas conexiones con el Estado.

Pequiven no sólo es proveedor de Ferralca, sino que a la vez es uno de sus clientes, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Ferreras Garza también figura como representante legal de International Water Supplies LTDA, una empresa registrada en el paraíso fiscal de Barbados, y que es dueña de las acciones de Ferralca.

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE FERRO ALUMINIO, C.A. (FERRALCA)
30/03/2018
a los veintisiete (30) días del mes de marzo de 2018, se
reunieron en la sede de la compañía ubicada en la
el accionista INTERNATIONAL WATER SU
mercantil debidamente protocolizada bajo las leyes de Barba
propietaria de Trecientas setenta y cinco mil
por el Sr. ALBINO FERRERAS GARZA, tit
No. [REDACTED] en su condición de Represen
al poder otorgado el 22 de abril del 2014 y
de la Asamblea, a los fines de celeb
ordinaria de accionistas sin necesidad de conv
ente el ciento por ciento (100%) del capital socia
totalidad del capital social, se declaró la asamb
lectura a los puntos orden del día: PRIMER
Capital Social en UN MIL SETECIENTOS M

Hasta marzo de 2018, Ferreras Garza figura como apoderado de International Water Supplies LTDA, una compañía registrada en Barbados que es dueña de las acciones de Ferralca.

Las buenas relaciones de la contratista incluyen al sector militar. La Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX) del Despacho del Viceministro de Servicios del Ministerio de la Defensa debe autorizar la compra del ácido sulfúrico, un componente que puede ser usado para la elaboración de explosivos. En los registros de esta empresa se puede observar que este permiso fue renovado sin interrupciones, al menos entre 2013 y 2017, por los generales de brigada Gerardo Ignacio Velásquez Ramos y Carlos José Alexander Armas López y por el general de división Humberto Luis Laurens Vera, quienes presidieron este despacho en ese lapso.

Aquí no terminan las coincidencias de Ferreras Garza con el sector petrolero. En el RNC también aparece vinculado a la directiva de la empresa Col-Petroleum Services, C.A., dedicada a prestar servicios técnicos para compañías petroleras. A esto se suma la estratégica ubicación de su bufete en la urbanización Chuao, al sureste de Caracas, en una de las torres del Centro Banaven (cuyos trazos arquitectónicos le valieron el sobrenombre de *El Cubo Negro*), justo al lado de una oficina de Petropiar, una empresa mixta con participación de Pdvsa y la estadounidense Chevron.

Armando.info se acercó hasta la sede del escritorio, que sigue despachando y recibiendo comunicaciones, entre estas la solicitud de entrevista que dejó este medio a Ferreras y Bello Anselmi el pasado 22 de junio que, hasta la fecha de publicación de este reportaje, no ha tenido respuesta. En la puerta del despacho, que da hacia un gran letrero en el que se mezclan los logos del bufete y de Petropiar, indican que los socios se encuentran fuera del país.

Fecha de creación

2021/07/04